

Las enseñanzas de Ecuador: rebelión contra el FMI y neoliberalismo en cuestión

Por Arturo Laguado Duca* y Daniel García Delgado**

*Investigador del área Estado y Políticas Públicas

** Investigador y Director del área Estado y Políticas Públicas



Hace pocas semanas escribimos que en América Latina soplaban vientos de cambio. Señalábamos que las *fake news* y el *lawfare* (y la traición al pacto electoral, como sucedió en Ecuador), eran útiles para llegar al poder, pero no alcanzaban para garantizar la gobernabilidad, obligando al neoliberalismo tardío a una deriva antidemocrática.

Aquellos vientos se han acelerado en estos días. En Brasil, Bolsonaro ha visto derrumbarse la operación contra Lula montada por el ex juez Moro, hoy su Ministro de Justicia. Probablemente, el juicio contra el expresidente sea anulado por manifiestas irregularidades. Paralelamente, uno de sus programas bandera, la reforma previsional, amenaza derrumbarse en el Congreso mientras la economía brasileña no logra despegar. El futuro del presidente brasileño luce problemático.

En Perú el conflicto se agudiza. En este caso las demandas de la población tienen ribetes más institucionales que sociales. El presidente Vizcarra -con amplio apoyo popular- no aceptó el chantaje del fujimorismo, atrincherado en el legislativo. Los congresistas que responden a Keiko Fujimori, intentaron una solución a la venezolana, nombrando una "presidenta fantasma". Pero el empecinamiento de Vizcarra en cumplir su palabra de llamar a elecciones generales en 2020 sumado a la actitud prescindente de las FFAA, dieron por tierra con esa solución. Por el momento, fracasó el golpe institucional, pero se mantiene la inestabilidad crónica que vive Perú desde hace más de 10 años. Cuatro ex presidentes presos y uno que se suicidó para evitar la cárcel, lo ejemplifican.

En Ecuador la situación es aún más ríspida. La traición de Lenin Moreno a quienes lo votaron como continuador de la Revolución Ciudadana y la posterior entrega del país al FMI, desembocaron en una gran insurrección popular y la declaración del Estado de sitio por 60 días. El Estado de excepción no calmó las aguas, pero ya dejó sus primeras víctimas fatales.

Como suele suceder, la ayuda del FMI -10 mil millones de dólares, de los cuales el Fondo desembolsó 4.200- llegó acompañada de una serie de condiciones. Entre otras, la rebaja del 20% de los sueldos para los nuevos

empleados públicos, una reforma laboral que se concretó en despidos en el Estado, la 'actualización de las tarifas' de los servicios públicos y la 'optimización de los subsidios a los combustibles' que se tradujo en el incremento de casi el 30% en las naftas y cerca del 130% en el diesel. Todas estas medidas fueron justificadas con el argumento de 'la pesada herencia' acompañado de la xenofobia; en este caso contra la inmigración venezolana.

La liberación del precio de los combustibles fue la gota que rebalsó la paciencia de los sectores populares ecuatorianos que salieron masivamente a la calle. La imposición del estado de excepción que suspende el derecho a la protesta y autoriza la censura previa a los medios de comunicación, no parece suficiente para garantizar la permanencia de Moreno en el gobierno. De hecho, el último en sancionarlo fue el ex presidente Lucio Gutiérrez en 2005, destituido por el Congreso ante la imparable ola de manifestaciones populares.

Si se tiene en cuenta la tradición de movilización del pueblo ecuatoriano -desde 1990 el único presidente que finalizó su mandato fue Rafael Correa- es probable que el transformismo de Lenin Moreno no tenga un final feliz. Como en el siglo pasado, la actitud que tomen las Fuerzas Armadas vuelve a ser determinante.

De la inestabilidad de Sudamérica se pueden aprender algunas lecciones útiles para la Argentina; tanto para el oficialismo como para la oposición.

Para Cambiemos, constatar que otra vez llega a tarde. Llegó a destiempo cuando no supo entender el momento que vivía el mundo, abriendo la economía argentina cuando la globalización neoliberal entraba en crisis de la mano del presidente Trump.

Macri tampoco eligió el momento propicio para interpelar a las clases medias con su discurso basado en el odio a los pobres. Si la aporofobia pudo haber sido electoralmente fructífera al inicio de su gobierno, la clase media argentina está ya demasiado golpeada para olvidar sus vicisitudes materiales y darle otra oportunidad a Cambiemos.

A diferencia de otros países de América Latina, en Argentina existe el recuerdo reciente de mejores condiciones de vida -demasiado contrastante con el empobrecimiento generalizado que dejaron cuatro años de gestión neoliberal- para que el fascismo social -esa generalización del odio hacia el otro, según la expresión acuñada por Boaventura de Souza Santos- construya una nueva mayoría. De la misma manera que las relaciones amigables con el FMI no evitaron la debacle de la economía argentina, el discurso de ultra derecha a lo Bolsonaro tampoco se constituye en una alternativa viable para salvar a la gestión de Cambiemos.

El caso ecuatoriano también conlleva una enseñanza para el futuro gobierno. En momentos en que hay consenso en que la deuda contraída con el FMI es impagable en los términos pactados, se discute cuáles deberían ser las condiciones de un nuevo acuerdo.

Es claro que la opción griega de someterse a los dictados del FMI no es aceptable si se quiere romper la cadena de dependencia del capital financiero para impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo. Como alternativa se ha planteado recientemente una reestructuración amistosa de la deuda. Es decir, honrar el servicio de la deuda sin quita de capital ni de intereses, pero posponiendo los plazos de pago, siguiendo el modelo usado por Uruguay en 2003. En pocas palabras, comprar tiempo.

Sin entrar en discusiones macroeconómicas sobre el camino uruguayo de reestructuración de la deuda -las críticas ya han sido planteadas por economistas ortodoxos y heterodoxos- esta alternativa plantea problemas políticos importantes.

La propuesta de aplazar los pagos que vencen en los próximos años para, primero crecer y después enfrentar las obligaciones financieras, no es sólo éticamente cuestionable, sino políticamente inconducente. Pedir esfuerzos al golpeado pueblo argentino para responderle a acreedores que han tenido ganancias exorbitantes bajo los dictámenes del FMI, implica grandes riesgos de legitimación. Un nuevo modelo de desarrollo productivo necesitará de un gobierno con importante apoyo popular para poder negociar con los actores productivos en situación de fortaleza. Ciertamente el aplazamiento no parece ser un camino para lograrlo.

Como enseña el caso ecuatoriano, tener relaciones amigables con el FMI puede ser terriblemente costoso para los gobiernos latinoamericanos. Basta recordar a quienes proponen una salida de la deuda a la uruguayaya que, después de que el presidente Jorge Batlle renegociara sus obligaciones de la mano del FMI, el Partido Colorado que representaba nunca volvió a ganar elecciones.

Es razonable pensar que retomar el sendero del desarrollo no pasa por tener una posición negociadora amigable con los mercados dado que ésta puede implicar el riesgo de caer en la trampa griega. En su lugar se debe buscar una solución a la argentina, donde el peso de la reestructuración no caiga en los sectores más golpeados por la fracasada experiencia del neoliberalismo tardío.